

RECOMENDACIÓN NÚMERO:035/2000.
QUEJOSO:AGUSTÍN AMAYO HERNÁNDEZ.
EXPEDIENTE: 930/00-I.

Puebla, Pue., a 25 de Octubre de 2000.

C. GAUDENCIO CID ALCÁNTARA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE VICENTE GUERRERO, PUE.

Distinguido señor Presidente:

La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º y 13º, fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha examinado los elementos contenidos en el expediente 930/00-I relativos a la queja formulada por Agustín Amayo Hernández en favor de Mercedes de los mismos apellidos; y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.- El 6 de marzo del año en curso, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, recibió la queja de Agustín Amayo Hernández en representación de su hermana Mercedes, de los mismos apellidos quien en síntesis manifestó que sin poder precisar la fecha exacta en el mes de diciembre del año próximo pasado, el Presidente Municipal de Vicente Guerrero, Puebla, ordenó la construcción de una carretera de terracería a fin de comunicar las poblaciones de Yahualutzingo y Telpatlán, afectando con ello una fracción del predio denominado “La Peña” y los árboles existentes en la misma, propiedad de la sucesión de Celerino Amayo Hernández.

II.- Por determinación de 17 de marzo del presente año, este Organismo Público Protector de los Derechos Fundamentales, admitió la aludida queja, asignándole el número de expediente 930/00-I, y se pidió al Presidente Municipal de Vicente Guerrero, Puebla, el informe con justificación correspondiente, el que fue rendido en su oportunidad.

III.- El 28 de julio y el 23 de agosto de este año, en vía de colaboración se solicitó diversa documentación al Delegado en el Estado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, misma que fue remitida mediante oficios PFPA.21.07.4174 y PFPA.21.02.4358, respectivamente.

Del mencionado informe y demás constancias que integran el presente expediente, se advierten las siguientes:

E V I D E N C I A S

1.- La copia certificada de la sentencia ejecutoriada dictada en el expediente 969/95, relativa al juicio de usucapión tramitado ante el Juzgado Segundo de lo Civil de Tehuacán, Puebla, en relación al terreno denominado "La Peña" ubicado en la población de Yahualutzingo, Puebla.

2.- La copia certificada del auto mediante el cual el Juez Segundo de lo Civil de Tehuacán, Puebla, designó como albacea provisional a Mercedes Amayo Hernández, respecto de la sucesión intestamentaria a bienes de Celerino Amayo Hernández.

3.- El acta circunstanciada de 9 de marzo del presente año, en la que un Visitador de este Organismo

hizo constar la manifestación del Presidente Municipal de Vicente Guerrero, Puebla, respecto de la afectación del predio materia de la queja.

4.- El acta de inspección de fecha 16 de mayo de 2000, entre otros del predio denominado “La Peña” sito en la población de Yahualutzingo, Puebla, que levantó personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado.

5.- La copia certificada del avalúo respecto a los daños ocasionados al inmueble “La Peña”, con motivo de la ampliación de una brecha de 4 metros a 9 metros en una longitud de 1000 metros.

6.- Seis placas fotográficas.

OBSERVACIONES

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión establece: “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es un Organismo Publico Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”

Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno de la misma Comisión, señala: “Se entiende por Derechos Humanos los atributos de cada persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y

tratados internacionales suscritos y ratificados por México”.

El artículo 14 de la Constitución General de la República, en lo conducente, señala: *“Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.”*

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, primer párrafo, a la letra dice: *“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento”*.

En el caso a estudio, Agustín Amayo Hernández en representación de su hermana Mercedes de los mismos apellidos, hizo consistir su inconformidad en la afectación de una fracción del predio denominado “La Peña” sito en la población de Yahualutzingo y de los árboles maderables existentes en la misma, propiedad de la sucesión intestamentaria a bienes de Celerino Amayo Hernández por parte del Presidente Municipal de Vicente Guerrero, Puebla, con motivo de la construcción de un camino de terracería.

Ahora bien, de las evidencias relatadas, las que tienen pleno valor probatorio al tratarse de constancias expedidas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, se advierte que el Presidente Municipal de Vicente Guerrero, Puebla, afectó una fracción del predio denominado “La Peña” sito en la población de Yahualutzingo, propiedad de la sucesión de Celerino

Amayo Hernández, y causó daños en diversos árboles maderables existentes en la misma, con motivo de la construcción de un camino de terracería; corroborándose esto del contenido de las copias certificadas de la sentencia ejecutoriada dictada en el expediente 969/95, relativo el juicio de usucapión que tramitó Celerino Amayo Hernández y del auto mediante el cual se designó como albacea provisional a Mercedes Amayo Hernández de la sucesión intestamentaria a bienes de su hermano Celerino, expediente 92/2000, radicados ambos procedimientos ante el Juzgado Segundo de lo Civil de Tehuacán, Puebla, así como de las actas de 9 y 16 de mayo del año en curso, que respectivamente levantó un Visitador de esta Comisión y personal de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente en el Estado, y diversas fotografías, documentos y diligencias de las que se desprende la afectación y los daños de referencia.

En tal situación, este Organismo Protector de los Derechos Fundamentales considera que la actuación del Presidente Municipal de Vicente Guerrero, Puebla, es conculcatoria de Derechos Humanos, tomando en consideración que los artículos 14 párrafo segundo y 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esencia definen como garantías de seguridad y legalidad de todo gobernado, el no poder ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sin previo juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales de la ley que rige el acto; además que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; de suerte que si en el caso a estudio, al realizarse los trabajos de ampliación y modificación del camino que va de la carretera secundaria de Vicente Guerrero a Vista Hermosa, con destino a la población de Cocatepachapa,

el mencionado Presidente Municipal afectó una fracción del terrero denominado “La Peña” de 9 metros de ancho por 1000 metros de largo, propiedad de la sucesión intestamentaria a bienes de Celerino Amayo Hernández, derribó 59 árboles de encino y arrancó 600 renuevos (arbolitos) de pino, ello resulta violatorio de las aludidas garantías, debido a que dichos actos se realizaron sin que mediara procedimiento expropiatorio alguno, y contraviniendo de igual forma lo preceptuado en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Unidos Americanos el 22 de noviembre de 1969, aprobada y ratificada por México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981, cuyo tenor es el siguiente: *“Derecho a la propiedad privada. 1.- Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2.- Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en caso y según las formas establecidas por la ley...”*

No es óbice para las conclusiones anteriores, lo argumentado por el Presidente Municipal de Vicente Guerrero, Puebla, al rendir informe, en el sentido de que no hubo invasión de terreno en la apertura de terreno a la comunidad de Coxcatépachapa; habida cuenta que el citado Presidente no aportó prueba alguna tendiente a justificar esa aseveración, y sí en cambio se encuentra desvirtuada fehacientemente mediante el material probatorio a que se ha hecho mérito con antelación, específicamente de la confesión del propio Presidente Municipal vertida a un Visitador de esta Comisión el 9 de marzo de 2000, en la que acepta expresamente que sí realizó la invocada obra dentro del terreno propiedad de

la sucesión quejosa y que la razón por la cual no indemnizaba a ésta es porque carece de presupuesto.

Asimismo, en relación a lo que aduce el multicitado Presidente Municipal de Vicente Guerrero, Puebla, en la diligencia de 9 de marzo de este año, consistente en que el camino que se abrió ya existía, pues la gente acostumbraba pasar por ahí, y que él vela por los derechos humanos de todos los habitantes de su Comunidad y no solo por los de una persona; es pertinente hacer notar que si bien en la diversa diligencia de inspección de 16 de mayo de 2000 que levantó personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Delegación en el Estado, se asienta que según los vecinos del lugar ya existía una brecha de aproximadamente 4 metros, siendo ampliada a 9 metros, también lo es que en autos no existe algún elemento de convicción justificante de que la invocada brecha fuera un bien de dominio público del invocado Municipio, y en cambio sí está demostrado cotegóricamente que la misma forma parte de los bienes de la sucesión intestamentaria quejosa; y de que aún cuando el artículo 41 fracciones XXIII, XLII y XLIII de la Ley Orgánica Municipal, dispone que los Presidentes tienen la obligación de mejorar los servicios y procurar la eficiente comunicación entre los poblados, es indudable que cuando se trata de actos de molestia como lo es la afectación de inmueble y daños a particulares, deben respetarse las garantías de legalidad y seguridad jurídica, amén que todo poder público se legítima en su ejercicio, en tanto proteja y respete los derechos fundamentales, independientemente de que se trate de intereses colectivos o particulares.

Así pues, estando acreditada la violación a los Derechos Humanos de la sucesión intestamentaria a bienes de Celerino Amayo Hernández en los términos expresados, es justo y legal que el Presidente Municipal

de Vicente Guerrero, Puebla, repare la afectación causada indemnizándola conforme al valor comercial del predio de referencia, al no tratarse de una expropiación. Asimismo, en relación a los recursos maderables, indemnizarla como mínimo con base en el avalúo que emitió la Delegación en el Estado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Subdelegación de Recursos Naturales, es decir, la cantidad de \$29,373.00, derivada del derribe de 59 árboles de encino y 600 renuevos (arbolitos) de pino, probanza a la que se le concede pleno valor, al haber sido elaborada con rigor científico por un técnico perteneciente a un Organismo especializado en la materia.

Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente Municipal de Vicente Guerrero, Puebla, las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S

PRIMERA.- Implemente a la brevedad las acciones legalmente necesarias, tendientes a indemnizar a la sucesión intestamentaria de Celerino Amayo Hernández a través de su legítima representante Mercedes de los mismos apellidos, la superficie de terreno de que fue privada, tomando como base el valor comercial del terreno en esa zona del Estado.

SEGUNDA.- Repare los daños causados a la mencionada sucesión con motivo de los hechos a que se refiere este documento, indemnizándola como mínimo conforme al avalúo que emitió la Delegación Federal de Protección al Ambiente, a saber la cantidad de \$29,373 (Veintinueve mil trescientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.).

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a usted que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, nos sea informada dentro del término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la recomendación

Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el compromiso de darle cabal cumplimiento, con independencia de hacer pública, dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo.

Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, no pretenden en modo alguno, desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, por el contrario, deben ser concebidas como un instrumento indispensable de las Sociedades Democráticas y de los Estados de Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá de manera progresiva

RECOMENDACIÓN NÚMERO:035/2000.

cada vez que se logra que aquéllas y éstos sometan su actuación a la norma jurídica, y a los criterios de justicia que conlleva al respeto de los derechos humanos.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO.

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.